



El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)

Es una organización regional, de la sociedad civil, sin fines de lucro, fundada en 2010. Busca **fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos**, y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales, con el fin de que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.

PODER se enfoca en comunidades locales afectadas **por empresas de industrias no deslocalizables, incluyendo los sectores extractivos, de infraestructura / transporte y manufactura pesada**. Además, da prioridad a proyectos en ciudades globales, específicamente en los sectores financiero, de seguros e inmobiliario, donde los mecanismos de remediación económicos, financieros y otros tienen más impacto para las comunidades.

Concentra sus esfuerzos principalmente en México, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Colombia (las principales economías de la región), y ocasionalmente en El Caribe, América Central y América del Sur.

Las estrategias de PODER

- Realiza **investigación corporativa de industrias estratégicas** para evidenciar patrones de captura del estado y violaciones a derechos humanos por parte de empresas, para disminuir la asimetría de información y afinar estrategias de rendición de cuentas y acceso a la justicia por parte de comunidades y trabajadores/as afectados por la actividad empresarial.
- Desarrolla **plataformas y herramientas tecnológicas que promueven la apertura de datos** sobre el sector privado y sus relaciones con el Estado, incluyendo bases de datos, visualizaciones y plataformas de filtración de información como Méxicoleaks, Chileleaks Perúleaks. Además, desde el periodismo y estrategias de comunicación externa, PODER busca explorar narrativas que permitan exponer la captura del Estado de forma efectiva y comprensible para un amplio público y así hacer presión ante empresas, inversionistas y reguladores.
- **Se vincula e incide** en el ámbito nacional, regional e internacional con tomadores de decisiones, inversionistas y comunidades para mejorar la regulación y las prácticas dentro del sector privado, así como facilitar el acceso a la justicia y prevenir daños.
- Acompaña **procesos organizativos y estrategias legales** de comunidades cuyos derechos han sido afectados por malas prácticas empresariales y promueve el fortalecimiento de sus capacidades para la defensa de sus derechos para que sean agentes de cambio a largo plazo.